



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



Nº de solicitud: 001-071427

■ ha presentado solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El objeto de la solicitud es el siguiente:

*“Quiero conocer los resultados de reuniones y qué empresas y qué productos van a realizar en el Reino de España referente a lo indicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en abril referente a un nuevo PERTE sobre microchips y semiconductores, que desplegará una inversión pública de más de 11.000 millones de euros.”*

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual

## RESUELVE

Denegar el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por ■  
■ en la forma indicada a continuación:

La solicitud de información de ■ sobre los resultados de las reuniones, empresas y productos referentes al PERTE Chip, microelectrónica y semiconductores, ha de considerarse una solicitud de acceso a la información pública al amparo del derecho a la información pública reconocido a todas las personas por el art. 105 b) de la Constitución y regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

La LTAIBG no configura el derecho de acceso a la información pública como un derecho absoluto sino sujeto a algunos límites, entre otros, los que señala en el art. 14.1, que relaciona una serie de materias en las que podría limitarse legalmente el acceso a la información. Dos de estas materias son “los intereses económicos y comerciales” (aptdo. h) del citado precepto) y “la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión” (aptdo. k)).



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



Respecto a la primera materia, durante las reuniones mantenidas entre las diferentes empresas con la Administración, se ha compartido determinados datos e informaciones sobre sus ofertas de productos y servicios que, sin duda, revelan o pueden revelar aspectos de sus estrategias comerciales que, de ser conocidos, podrían afectar a su posición en el mercado y a su política de comercialización y venta de productos y servicios. Desde este punto de vista, no hay duda de que la divulgación de esta información podría resultar lesiva para los intereses económicos y comerciales de las empresas que han mantenido reuniones con la Administración.

Y con respecto a la segunda materia, este proyecto está en una fase previa a la tramitación formal de cualquier iniciativa normativa que pudiere tomar distinta forma en el futuro y que está destinada a recabar opiniones, criterios e intereses que pudieran ayudar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) a definir posibles programas de ayudas dentro del PERTE o cualquier otro mecanismo destinado al fomento de la industria de microelectrónica y semiconductores en nuestro país. En este sentido, y dado que se trata del proyecto estratégico de mayor envergadura de todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se requiere de la mayor discreción y secreto en la información para tomar las mejores decisiones de cara a invertir los 12.250 millones de euros de presupuesto del proyecto, al que habría que añadir el enorme efecto tractor que ejercería sobre otros sectores económicos del país.

Para la aplicación de los límites establecidos en el apartado 1, el apartado 2 del art. 14 de la LTAIBG dispone que *“la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”*. De este modo, constatado que la divulgación de la información solicitada podría provocar un daño cierto para los intereses comerciales y otros bienes jurídicos de las empresas potenciales inversoras en este proyecto estratégico, (test del daño), quedaría por definir si hay en el caso algún interés público o privado superior al de los solicitantes que justificara la divulgación de la información aún ocasionando un perjuicio a éstos (test del interés) y de qué manera, *“justificada y proporcionada a su objeto”* debería limitarse el acceso para minimizar en lo posible el alcance de la limitación del derecho.

Respecto de la primera cuestión, no hay en este caso un interés público o privado que justifique la divulgación de la información por encima del perjuicio que la misma causaría a los intereses comerciales y a la propiedad intelectual o industrial de las empresas que han mantenido reuniones con la Administración ni por encima del interés general que supone la garantía de la confidencialidad en la toma de decisiones para la ejecución del



MINISTERIO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
Y TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL



plan estratégico.

Respecto de la segunda cuestión, hay que considerar separadamente las dos informaciones solicitadas, esto es, la referida a la identidad de las empresas participantes, por un lado, y la referida al resultado de las reuniones, por otro. Comenzando por la primera, hay que tener en cuenta que, siendo la industria un sector liberalizado, la divulgación de la información sobre cuáles de éstos han participado en reuniones con la Administración y, consecuentemente, se han interesado por realizar inversiones en el Reino de España -que implica el conocimiento de cuáles no se han mostrado interesados-, podría suponer ya de suyo un perjuicio para su estrategia o su posición en el mercado. Y analizando la segunda, hay que considerar que las aportaciones realizadas, en caso de hacerse públicas, pueden comprometer la adecuada toma de decisiones por parte de la SETELECO y, consecuentemente, resultar un perjuicio en el interés general. En este sentido, considerando conjuntamente estos razonamientos, la aplicación los límites señalados en las letras h) y k) del artículo 14.1 de la LTAIBG a la solicitud de información pública de [REDACTED] implica la denegación total del acceso sin que sea posible matizarla o establecer excepciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

D. Arturo Azcorra Saloña.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente en cada caso (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.